



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTO DE RADICACIÓN

JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECIOCHO

ROJAS ALVAREZ MADAI

VS.

CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO,

I.A.P. Y OTRO

EXP. LABORAL: 1168/2019



En la Ciudad de México, a cinco de junio de dos mil diecinueve.

Por recibida la demanda que formula: **ROJAS ALVAREZ MADAI**, Constante de diez fojas útiles, con carta poder, con anexos consistente en cédula profesional en copia simple, más dos copias, del escrito de demanda para correr traslado a: **CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO, I.A.P.; ADMINISTRADORA ZAMAHARA, S.A. DE C.V.**.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), se tiene como **apoderado** legal de la parte actora al **C. JOSE FERNANDO SANTILLAN GALINDO** y demás personas señaladas en el proemio del escrito de demanda y/o carta poder.- **Se admite a trámite la demanda en la vía de procedimiento ordinario.**- Regístrese en el Libro de Gobierno con el número correspondiente.

Conforme al artículo 878, fracción II de la (LFT) se hace saber a la parte actora que solo podrá aclarar o modificar su demanda por una sola vez, en la etapa de demanda y excepciones.

Con fundamento en los artículos 873, 876, 878, 879 de la (LFT), se señalan las **NUEVE HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE**, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, **DEMANDA Y EXCEPCIONES**, a la que deben comparecer las partes, apercibiéndoselos de que para el caso de no hacerlo, en la etapa conciliatoria se les tendrá por **inconformes** con todo arreglo conciliatorio y respecto de la etapa de demanda y excepciones, a la parte actora por **reproducido** su escrito inicial y a la parte demandada por **contestada** la demanda en **sentido afirmativo**, salvo prueba en contrario.

Se apercibe a la parte demandada, que al dar **contestación** por escrito a la demanda debe **entregar copia** de la misma a la parte actora, por conducto del Auxiliar y/o Secretario de Acuerdos que actúe; de lo contrario se expedirán a su costa.

Se apercibe a las partes que de **no señalar domicilio, dentro del lugar de residencia de esta Junta**, para recibir **notificaciones**, aun las de carácter personal, se les harán por **Boletín Laboral**, conforme a los artículos 739 y 746 de la (LFT).

CONCILIACIÓN. Con el objeto de encontrar un arreglo amistoso, que evite molestias, gastos y eventuales resultados del proceso jurisdiccional, se cita a las partes para que comparezcan ante **EL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECIOCHO DE ESTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, el próximo día **VEINTICUATRO DE OCTUBRE, DEL DOS MIL DIECINUEVE**, a las **NUEVE horas**; en donde con su valiosa participación y la del Funcionario Conciliador, ahondaran en las distintas alternativas de solución, con fundamento en el artículo 876, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo; se hace saber a las partes que hasta **antes del cierre de instrucción**, queda expedita la posibilidad de conciliar en el presente juicio, en términos de los artículos 876, fracción II, y 878 fracción I, de la ley sustantiva.

Se exhorta a las partes para que, de conformidad con los artículos 17, 18 y 48, quinto párrafo de la (LFT), **al hacer uso de la palabra** en las audiencias respectivas, lo realicen por **escrito o en forma breve y concisa**, con el objeto de hacer eficaces los principios del artículo 685 de la (LFT).

Se requiere a las partes, con base en los artículos 1 y 7 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que manifiesten por **escrito** su **consentimiento** para hacer públicos **sus datos personales**, su juicio y el laudo que se dicte, en el entendido de que, la **omisión** de desahogar dicho **requerimiento**, se tendrá como una **negativa** para que sus datos sean publicados.

ROJAS ALVAREZ MADAL

VS



H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MADAI ROJAS ALVAREZ, por propio derecho en mi carácter de actora en el presente juicio autorizando con las facultades contenidas en el artículo 692 de la Ley Federal de Trabajo al Licenciado en Derecho JOSÉ FERNANDO SANTILLÁN GALINDO con Cédula Profesional número 6504024 respectivamente, expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública, y demás profesionistas mencionados en carta poder anexa al presente de fecha 24 de mayo del año 2019, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en **INSURGENTES SUR 222, PISO 4, DESPACHO 402, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACION CUAUHTEMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO**, con el debido respeto comparezco para exponer:

Que, por medio del presente ocuro y por propio derecho vengo a promover formal demanda en contra de:

- **CENTRO DE APOYO AL MICRO EMPRESARIO, I.A.P.**
- **ADMINISTRADORA ZAMZAHARA, S.A. DE C.V.**
- **Todas estas empresas indicadas, tienen su domicilio para ser debidamente notificadas y emplazadas a juicio, el ubicado **EN AVENIDA COLONIA DEL VALLE, NÚMERO 615, SEGUNDO PISO, COLONIA DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO.****

Quienes tienen como **ACTIVIDAD O GIRO** el de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**.

ACLARACIÓN PREVIA

Se solicita a esta Autoridad que para efectos de las presentaciones reclamadas en el presente escrito deberá de considerar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que con fecha del 10 de junio de 2011 se promulgaron, en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1º. (PRIMERO) que establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad, en virtud a éstos, la valoración de los derechos fundamentales que vinculan a la premisa de que debe respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindiendo o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor a individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (invisibilidad e interdependencia); así mismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, más no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deben reconocerse a favor del individuo (progresividad). De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. El derecho del trabajo en pro de la persona humana tiene como naturaleza fundamental generar las condiciones mínimas que requiere la clase trabajadora para su subsistencia y reconocimiento, no simplemente como clase sino como lo que son: Seres Humanos en lucha legítima por la subsistencia. Por ello, los derechos laborales humanos, aparecen como conquistas y necesidades de la clase trabajadora, por tanto, cualquier pérdida o menoscabo de tales derechos resultan inadmisibles en el orden jurídico de un Estado Social Democrático de Derecho, al que aspira ser el Estado Mexicano, los derechos adquiridos por la clase trabajadora resultan con irrenunciables, y se está en su legítimo derecho de defensa como alguna reforma o modificación implique la pérdida o menoscabo de los logros de clase, la pérdida de los mismos implica también pérdidas colectivas y afectación de la esfera jurídica de los mismos, no solo desde el aspecto constitucional sino además desde el convencional como son los derechos consagrados en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" vigente en México y publicado en el Diario Oficial de la Federación el Primero de Septiembre de Mill Novecientos Ochenta y Ocho, en específico lo contenido en los artículos 6 y 7 inciso d), éstos son derechos inalienables de la clase trabajadora reconocidos en el ámbito nacional e internacional con fundamento en los artículos 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5; La Declaración de Philadelphia de 1944 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Instrumentos que aparte de nuestra normatividad constitucional de conformidad con lo señalado en los artículos 1 y 133 de nuestra Constitución, con base en estos dispositivos, el Estado Mexicano se encuentra obligado a armonizar el sistema jurídico legal interno al internacional y, por tanto, dichos dispositivos son de carácter fundamental y obligatorio, toda vez que la violación de nuestros derechos humanos, no solo se da por acción (heteroaplicabilidad) sino también por omisión (autoaplicabilidad), absteniéndose de observar dichos dispositivos internacionales, se materializa la violación de los derechos humanos laborales, pero sobre todo porque su violación es impersonal, general y abstracta de acuerdo al principio convencional erga omnes. Ahora bien, de la reforma a nuestra Carta Magna antes indicada se desprende que eleva los derechos laborales a la condición de derechos humanos, y en ejercicio del principio de convencionalidad también reconoce la aplicabilidad de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como se ha hecho vales con criterios del Poder Judicial Mexicano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que debemos tomar en cuenta que la Ley Federal del Trabajo, tiene como fin la justicia social, equilibrio entre los factores de la producción y proporcionar el trabajo decente en todas las relaciones laborales; finalidad que el Estado en sus diferentes instancias deben cumplir armonizando y respetando los derechos fundamentales sin romper el equilibrio entre los mismos; ésta es la mayor protección a la dignidad humana. Sin embargo, cuando la legislación se emite sin considerar el marco nacional e internacional de protección y garantía de los derechos fundamentales se incurre en su vulneración e incumplimiento de sus fines. Más grave aún, cuando se pierde vista que el respeto a la dignidad de todo ser humano prohíbe que el Estado trate a una persona como medio para alcanzar un fin. La libertad de trabajo se afecta cuando el ingreso y permanencia en el mismo está sujeto a la discrecionalidad patronal, incluso a condicionantes particulares, que eliminan posibilidad de defensa y reclamo de derechos individuales y colectivos al mismo ante el temor fundado que se convierta en la razón de la terminación de la relación del trabajo, prácticas discriminatorias, desigualdad, acoso sexual, entre otros. Las fracciones XXI y XXII del apartado "A" del Artículo 123 de la constitución, tiende a la protección del derecho fundamental a la "estabilidad en el empleo", condición necesaria para alcanzar una vida digna y seguridad social. La estabilidad en el empleo, es un derecho humano protegido en los Artículos 1º y 123 constitucionales, 23 de la DUDH, 6, 7 y 8 PIDESC, 2.1, 2.2 y 5 del PIDCP, 6,7 de Protocolo de San Salvador, Convenios 87, 95, 96 y 158 de la OIT, 12 y 13 de la Carta Democrática Interamericana, XIV y XXXVII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1, 2 y 26 de la CADH, 19 de la Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador. Por lo que se concluye que la Ley Federal del Trabajo, recientemente reformada, afecta de manera regresiva los derechos adquiridos por la clase trabajadora violando derechos tanto constitucionales como convencionales. De manera especial se solicita a esta Autoridad que tomen en consideración los preceptos invocados anteriormente por cuanto hace el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, recientemente reformado, toda vez que es el mismo es contrario a nuestra norma máxima en sus artículos 1º, 14, 16, 17 y 123, toda vez que, mediante una ley reglamentaria se restringe derechos que la Constitución protege ampliamente, resultando regresiva dicha prevención y contraria al principio pro homine. El artículo 123 constitucional en sus fracciones XXII del apartado A y IX del apartado B, reconocen el derecho a la estabilidad en el empleo y en caso de que un patrón vulnere ese derecho prevé una sanción. En el caso,

que la sanción aplicable es el pago de los salarios caídos que generen desde el momento de la violación del derecho hasta la restitución del mismo, interpretación pro homine que reconoce, protege y garantiza el derecho multicitado; sin embargo, al eliminar la sanción en los términos que fue concebida por el constituyente, se fomenta su vulneración y conductas arbitrarias en perjuicio de los trabajadores. El estado de derecho implica el cumplimiento de todos sus órganos e instancias, incluidas las Responsables, a la observancia de la norma máxima. Sin embargo, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo realizada en noviembre del año 2012, se restringen derechos fundamentales de los trabajadores con el debido proceso y acceso a la justicia, pues si la Constitución no restringe derechos, la Ley reglamentaria en ninguna circunstancia puede contrararla impidiendo limitaciones, como se pretende con el artículo 48 impugnado que restringe la sanción al patrón que vulnera el derecho a la estabilidad en el empleo a 12 meses. Evidentemente el derecho a la estabilidad en el empleo y la sanción impuesta por su vulneración por parte del patrón no tiene restricciones en la Constitución, por tanto, el artículo 48 de la Ley reglamentaria es institucional al imponer el límite de doce meses de salarios caídos cuando el artículo 123 constitucional en sus fracciones XXII del apartado A y IX del apartado B carece del mismo. La restricción del pago de los salarios caídos a un año, cuando los juicios duran hasta siete o más años, es completamente institucional, a razón de que éstos son una indemnización que, como pena, tiene la finalidad de sancionar al patrón, constituye una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió injustificadamente al trabajador, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada; los salarios vencidos están íntimamente vinculados con la procedencia de la acción principal ejercitada y originada en el despido, por lo que si éste se tiene por probado, la relación relativa a salarios caídos también resulta procedente, dado que el derecho al pago de indemnización constitucional y el de los salarios vencidos constituyen una misma obligación jurídica. El pago de los salarios caídos es consecuencia de la continuación del contrato de trabajo, pues lo que se demanda es la obligación de hacer que incumbe el patrón, consistente en la reinstalación del trabajador en su empleo y consecuente, el pago del salario que dejó de percibir al vulnerarse su derecho a la estabilidad en el empleo, por ello, es cuestionable que está sujeto a determinadas sanciones que debe cumplir, sanciones que no le serían impuestas en el caso de haber cumplido de acuerdo con lo pactado y lógico, también de que si él no hubiere dado margen para la iniciación del juicio, debe resentir las consecuencias de éste. La sanción impuesta por violación de un derecho fundamental es uno de los mecanismos de protección del estado de derecho, tratándose de un derecho social, como lo es el derecho al trabajo, con mayor razón debe garantizarse la tutela judicial, administrativa con el acceso a la justicia, pues ningún derecho es justificable si la sanción que se impone a su vulneración es sustancialmente menor al agravio causado. Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Autoridad que en el momento de resolverse el presente juicio, una vez que hayan sido condenados los demandados por haber despedido injustificadamente al accionante, tome en consideración que la estabilidad en el empleo es un derecho humano protegido en los artículos 1º y 123 constitucionales, 23 de la DUDH, 6, 7 y 8 PIDESC, 2.1, 2.2 y 5 del PIDCP, 6, 7 del Protocolo de San Salvador, Convenios 87, 95, 96 y 158 de la OIT, 12 y 13 de la Carta Democrática Interamericana, XIV y XXXVII, de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, 1, 2 y 26 de la CADH, 19 de la Declaración de los Derechos sociales del Trabajador y que en consecuencia el pago de los salarios vencidos encuentra su justificación en el hecho de que la parte actora se encuentra separada de su empleo sin percibir salario alguno, por causa no imputable a ella, por lo que el demandado incurre en una ineludible responsabilidad por haber despedido injustificadamente al accionante.

Y de quienes se solicita el pago y cumplimiento de las siguientes:

PRESTACIONES.

1.- Se demanda el cumplimiento del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, con efectos de REINSTALACIÓN en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando, con los incrementos, indexaciones y mejoras que se susciten tanto en el salario como en las prestaciones a que tenía derecho y que serán descritas en el cuerpo del presente ocuro, en virtud del injustificado despido del cual fui objeto, en los términos y circunstancias que se precisan en este capítulo y en el de hechos de la presente demanda. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.

2.- El pago de los SALARIOS VENCIDOS O CAÍDOS que se generen durante la tramitación del presente juicio, a partir de la fecha en la que me separaron de mi empleo de manera injustificada, y hasta que sea reinstalada física, jurídica y materialmente en el puesto en que me había venido desempeñando a favor de los demandados, resultando de estudio de derecho que los salarios caídos deben pagarse a salario integrado, en términos de lo dispuesto por artículos 84, 89 y demás relativos a la ley Federal de Trabajo, como lo han

sostenido en diversas ocasiones los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de trabajo cuya aplicación resulta obligatoria para esta autoridad laboral en los términos de los artículos 192 y 193 de la ley de amparo; tesis de jurisprudencia que a continuación se menciona:

Octava Época
Instancia: Segundo Tribunal Colegiado Del Quinto Circuito.
Fuente: Apéndice 2000
Tomo: Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia TCC
Tesis: 1130
Página: 989
SALARIO, INTEGRACIÓN DEL (ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).- De conformidad con lo establecido por artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que entregue al trabajador por su trabajo, de tal suerte que el salario debe integrarse con los bonos de despensa, subsidios de energía eléctrica y gas doméstico, aun cuando no exista convenio expreso al respecto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Octava Época:
Amparo directo 8/92.- Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. Síndico de la Quebra de Compañía Minera de Cananea, S.A. de C.V.- 22 de enero de 1992.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Nabor González Ruiz.- Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.
Amparo directo 427/91.- Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. Síndico de la Quebra de la Compañía Minera de Cananea, S.A. de C.V.- 29 de enero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Lucio Antonio Castillo González.- Secretario: Ramón Parra López.
Amparo directo 430/91.-Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. Síndico de la Quebra de la Compañía Minera de Cananea, S.A. de C.V.- 11 de febrero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Nabor González Ruiz González.- Secretario: Rafael Aguilar Hernández.
Amparo directo 150/92.- Alfredo González Rodríguez y otros.- 29 de abril de 1992.-Unanimidad de votos.- Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro.- Secretaria: Edna María Navarro García.
Amparo directo 220/92.-Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. y otro.- 17 de junio de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Lucio Antonio Castillo González.- Secretaria: Silvia Marinella Cován Ramírez.
Apéndice 1917-1995, Tomo V. Segunda Parte, página 626, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 904.

Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo: XI, Abril de 2000.
Tesis: I. 10. T. 17 L
Página:997
SALARIOS CAIDOS. PARA SU PAGO DEBE TOMARSE COMO BASE EL SALARIO INTEGRADO. En términos de los artículos 48, 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, los salarios vencidos constituyen una prestación accesorio a la acción de reinstalación, puesto que se encuentran contemplados como una consecuencia inmediata y directa; por lo tanto, tiene un carácter indemnizatorio; de ahí que para su monto debe aplicarse el salario integrado que percibía el actor en el momento del despido, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo, el monto de las indemnizaciones debe determinarse con el salario correspondiente al día que nazca el derecho a la indemnización e incluirse la cuota diaria y parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84 de la citada Ley.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 12169/98. Angélica Yolanda Barajas Fandanelli. 8 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Pedro Hernández de los Santos.
Véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Julio de 1999, Página 907, tesis XXIII. 1°. 3 L de rubro: "SALARIOS CAIDOS. PARA SU FIJACIÓN DEBE ESTARSE AL CONCEPTO DE SALARIO INTEGRADO"

En el orden mismo de ideas, el artículo 48 reformado, es contrario a nuestra Constitución Política en sus artículos 1°, 14, 16, 17 y 123, toda vez que, mediante una ley reglamentaria se restringen derechos que la Constitución protege ampliamente, resultado regresivo dicha prevención y contraria al principio pro homine. El artículo 123 constitucional en sus fracciones XXII del apartado A y IX del apartado B, reconocen el derecho a la estabilidad en el empleo y en caso de que un patrón vulnere ese derecho prevé a una sanción, dentro de dos posibles pretensiones que nuestra Ley califica como "acciones", consistente en optar por el cumplimiento del contrato y sus consecuencias, la reinstalación y la indemnización. En el caso, de la sanción aplicable es el pago

de los salarios caídos que se generen desde el momento de la violación del derecho hasta la restitución del mismo, interpretación pro homine que reconoce, protege y garantiza el derecho multicitado, que además se encuentra expresamente así estipulada en nuestra norma máxima. Sin embargo al limitar la sanción en los términos que fue concebida por el constituyente, se fomenta su vulneración y conductas arbitrarias en perjuicio de los trabajadores como el suscrito. El estado de derecho implica el cumplimiento de todos sus órganos e instancias, incluida esta H. Junta, a la observancia de la norma máxima, sin embargo, con la emisión del artículo 48 impugnado se violentó el párrafo tercero del artículo primero constitucional que obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, al eliminar sanciones por violaciones a los derechos se actúa en el sentido contrario a estas obligaciones, abre la puerta a sus violaciones y a la impunidad. En este orden de ideas, también se restringen derechos fundamentales de los trabajadores como el debido proceso y acceso a la justicia, pues si la Constitución no restringe derechos, la Ley reglamentaría bajo ninguna circunstancia puede contrariarla imponiendo limitaciones, como se pretende con el artículo 48 impugnado que restringe la sanción al patrón que vulnera el derecho a la estabilidad en el empleo a 12 meses. El primer párrafo del artículo primero constitucional es preciso:

“...los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece...”

De manera evidente el derecho a la estabilidad en el empleo y la sanción impuesta por su vulneración por parte del patrón no tiene restricciones en la Constitución, por tanto, el artículo 48 de la Ley reglamentaria reformada resulta inconstitucional al imponer el límite de doce meses de salarios caídos cuando el artículo 123 constitucional en sus fracciones XXI del apartado A y el IX del apartado B carece del mismo; reiterando que el artículo 48 impugnado es regresivo y violatorio de los artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante PIDESC, 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante PIDCP, 29 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante CADH, pues incluso la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal ya se ha pronunciado al respecto en el criterio que me permito reproducir:

Registro No. 167175

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIX, Mayo de 2009

Página: 274

Tesis: 2ª. XLVIII/2009

Materia(s): Constitucional, Laboral

SALARIOS CAÍDOS. LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE SU PAGO NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE 6 MESES, CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 43, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Conforme al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo en los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes expedidas por sus Legislaturas con base en lo previsto por el numeral 123 de la propia Norma Suprema y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, el artículo 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, señala que son obligaciones de los titulares, entre otras, reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieran separado y ordenar el pago de los salarios caídos a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En congruencia con lo anterior, se concluye que los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del servicio Civil del Estado de Morelos, al establecer que el trabajador que haya sido cesado en forma injustificada tendrá derecho a que se le paguen los salarios caídos, los que no excederán del importe de 6 meses, se apartan de los principios normativos fundamentales del derecho a la reinstalación e indemnización legal en caso de cese injustificado y, por ende, contravienen los numerales 123, apartado B, fracción IX, constitucional y 43, fracción III, de su Ley Reglamentaria, en la medida que en esta última no se prevé limitación de tiempo para el pago de los salarios caídos, los que deberán pagarse al trabajador injustamente despedido por el plazo en el que se hubieren generado.

Segunda Sala

Amparo directo en revisión 439/2009. Hermelinda Pérez Arizmendi. 29 de abril de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.

Por ello, la restricción del pago de los salarios caídos a un año, cuando los juicios duran hasta siete o más años, es completamente inconstitucional, en razón de que éstos son una indemnización que como pena tiene como finalidad sancionar al patrón, constituye una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió injustificadamente al trabajador, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada y los efectos reparatorios en un cumplimiento y reinstalación, los salarios vencidos están íntimamente vinculados con la procedencia de la acción principal ejercitada y originada en el despido, por lo que si éste se tiene por probado, la acción relativa a salarios caídos también resulta precedente, dado que el derecho al pago de indemnización constitucional y el de los salarios vencidos constituyen una misma obligación jurídica, vinculada al estatus previo a ser despedido y estar gozando del salario y demás prestaciones. El pago de los salarios caídos es consecuencia de la continuación del contrato de trabajo, pues lo que se demanda es la obligación de hacer que incumba al patrón, consistente en la reinstalación del trabajador en su empleo y consecuentemente, el pago del salario que dejó de percibir al vulnerarse su derecho a la estabilidad en el empleo, por ello, es inquestionable que está sujeto a determinadas sanciones que debe cumplir, sanciones que no le afectan impuestas en el caso de haber cumplido de acuerdo con lo pactado y lógico, también de que si él no hubiere dado margen para iniciación del juicio, la autoridad no habría tenido porque dictar un fallo en un plazo más o menos largo, por lo que fue el origen del juicio, debe resistir las consecuencias de éste. La sanción impuesta por violación de un derecho fundamental es uno de los mecanismos de protección del citado derecho, tratándose de un derecho social, como lo es el derecho al trabajo, con mayor razón debe garantizarse la tutela judicial, administrada con el acceso a la justicia, pues ningún derecho es justificable si la sanción que se impone a su vulneración es sustancialmente menor al agravio causado como ahora la Ley inconstitucionalmente reformada propone. En el caso concreto, el artículo 48 multuplicado se constituye en una norma imperfecta e inconstitucional, al ignorar la tutela judicial, siendo aplicable el criterio establecido en la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, el Juez Sergio García Ramírez emitió voto razonado señalado: 149. esta obligación estatal encuentra su asidero en la misma normativa tutelar de los trabajadores, normativa en la misma precisamente se fundamenta en una relación desigual entre ambas partes y que, por lo tanto, protege al trabajador como la parte más vulnerable que es. De esta manera, los Estados deben velar por el estricto cumplimiento de la normativa de carácter laboral que mejor proteja a los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, origen social, étnico o racial, y de su condición migratoria y, por lo tanto, tienen la obligación de tomar cuantas medidas de orden administrativo, legislativo sean necesarias, para enmendar situaciones discriminatorias de jure y para erradicar las prácticas discriminatorias realizadas por determinado empleador o grupo de empleadores, a nivel local, regional, nacional o internacional, en perjuicio de trabajadores migrantes. 28. Entre esos derechos no hay más distancia que la relativa a su materia, a la identidad de los bienes que tutelan, al espacio en el que surgen y prosperan. Tiene la misma jerarquía y reclaman idéntico respecto. No es debido confundir unos con otros, pero tampoco es posible ignorar la relación en que se encuentran, por el empeño de las circunstancias: digamos, por ejemplo que, si bien el derecho al trabajo no se confunde con el derecho a la vida, el trabajo es condición de una vida digna, e incluso de la vida misma: factor de subsistencia. Si se niega el acceso al trabajo, o se impide al obrero la recepción de sus frutos, o se obstruye la vía jurisdiccional o administrativa por la que este reclama sus derechos, podría quedar en riesgo la vida, y en todo caso sufrirá menoscabo la calidad de la vida, que es un punto básico tanto de los derechos económicos, sociales y culturales como de los civiles y políticos. 29. Los derechos humanos de los trabajadores, esto es, los derechos fundamentales de carácter laboral, derivan de dos fuentes, que operan de forma concertada: a) primero, la condición humana del titular, que excluye, como ya se dijo, desigualdades inadmisibles y discriminaciones; y b) segundo, la relación de trabajo que se establece entre el titular de esos derechos y la persona jurídica, individual o colectiva a la que presentara, presta o ha prestado sus servicios, relación que surge del hecho mismo de prestar, disponerse a prestar o haber prestado un servicio, independientemente de que aquella se encuentre formalizada a través de un contrato, que no existe en un gran número de casos – la mayoría, probablemente –, aunque si exista – y esto es lo que verdaderamente importa – el hecho determinante de la relación laboral, que es al mismo tiempo fuente de derechos y obligaciones. Así mismo, resulta regresivo y retroactivo la adición de los requisitos y causales del artículo 47 en mi perjuicio, por ejemplo, el agregado a la fracción segunda de dicho artículo en donde se incluyen las figuras del cliente y proveedor, ampliando los sujetos y motivos de la separación justificada y desnaturalizando así la relación de trabajo exclusiva entre trabajador y patrón, la cual está sustentada en términos del artículo 123 Constitucional, en donde se precisa de manera análoga las responsabilidades que tiene el patrón respecto de la conducta de sus familiares (cónyuge, padre e hijos y hermanos), por ende, igualmente será en el caso del trabajador, en dicha relación están excluidos definitivamente los proveedores y los clientes, de tal manera que la inclusión de estos sujetos no tiene razón ni fundamento constitucional, por ende, vulneran nuestros derechos Constitucionales porque legitiman además sujetos que no tienen sustento constitucional. Por otra parte, la reforma inconstitucional consistente en la posibilidad de entrega del aviso de rescisión de manera indistinta al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, deja en estado de indefensión al trabajador, en virtud de que es éste quien debe de recibir de manera inmediata dicho aviso, pues es el primer agravado y se pone en riesgo su subsistencia, además de violentar el principio de certeza jurídica, ya que el trabajador desconoce la causa de la rescisión hasta el momento de la notificación a la trabajadora, pues, no existe una sanción a la autoridad por su incumplimiento del plazo de notificación al trabajador queda en estado de aviso dicha norma carece de un elemento básico para una ley y termina siendo una simple moralidad de la autoridad en perjuicio al trabajador, violentando así a los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución en la reforma, que no es lo mismo que despidió injustificado aclaramos, en virtud de que la primera trae como consecuencia según dicha reforma la nulidad del despido, es decir, la inexistencia del mismo, más no así las consecuencias que tenía el despido injustificado en donde se le imputaba al patrón tal despido; en cambio, la nulidad del despido implica que el patrón no tuvo una justificación de separación del trabajador. Antes el incumplimiento de esa obligación se consideraba como despido

demandados me hicieron firmar para poder entrar a laborar, o cualquier otro documento que implique renuncia

9.- LA NULIDAD ABSOLUTA DE LAS HOJAS EN BLANCO Y FORMATO DE RENUNCIA que los

en lo dispuesto en los artículos 69 al 75 de la Ley Federal del Trabajo.

tiempo que duró la relación de trabajo y en ningún momento me fueron pagados. Lo anterior con fundamento

8.- EL PAGO DE LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, mismos que labore durante todo el

respectivos.

trabajo por causa imputable a los demandados, para todos los efectos legales, contractuales y escalafonarios

7.- El cómputo como parte efectiva de antigüedad de todo el tiempo que permanezca separado del

privados de sus derechos de seguridad social;

procedimiento respectivo restituya a todos los trabajadores de los demandados que se encuentran en mi caso

Distrito Federal, así como de la entidad de auditoría y verificación perteneciente al IMMS, para que a través del

despido y separación injustificada, por lo cual se solicitará la intervención de la Subsecretaría del Trabajo del

reduciendo el importe de las cuotas obrero patronales, situación que privó al inicio de mi contratación, hasta el

de inscripción ante el IMMS, o formulario con los datos incorrectos de nuestro salario, evadiendo así el pago o

y siguiente de dicha ley, que equipara al delito de defraudación fiscal al hecho relativo de no formular el aviso

de denunciar hechos que pueden llegar a revestir en carácter de delictuoso, tal como establece el artículo 305

certificada de la contestación a la demanda que los demandados formulen a esta prestación, para los efectos

de los plazos que señalan los artículos 15, fracción I y 34 de esta Ley." Desde ahora solicito se expida copia

los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario, hubiese sido entregados al Instituto dentro

las prestaciones en especie y en dinero que tengan derecho, siempre y cuando los avisos de ingreso o alta de

trate. No procederá la determinación del capital constitutivo, cuando el Instituto otorgue a los derechohabientes

omitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, del trabajador que se

importe de los capitales constitutivos. Dicho importe será deducible del monto de las cuotas obrero patronales

concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. En este caso, el patrón enterará al Instituto el

se viniera disminuido en su cuantía. El Instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes

especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho

inscripción o de avisar a los salarios efectivos o los cambios a éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en

asegurado, a sus familiares derechohabientes o al Instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de

Social, que establece: "Artículo 88. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al

constitutivos que se generen, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 88 y siguiente de la Ley del Seguro

de mi trabajo, como consecuencia, deberán los demandados ser condenados al pago de los capitales

durante el tiempo que duró la relación de trabajo con ellos y hasta el día en que fui despedida injustificadamente

conocimiento que los demandados me tienen dada de alta con un salario inferior al que realmente percibí

que debo disfrutar como trabajadora de los demandados, de los que me privaron al despedirme, pues se tiene

6.- El otorgamiento de los beneficios y prerrogativas de carácter médico asistencial y de gastos médicos

la presente demanda, reclamadas expresa e implícitamente.

5.- Las demás prestaciones que por derecho me corresponden y que se desprenden de los hechos de

sobre el total de las prestaciones devengadas durante el tiempo de prestación de servicios;

total de mi sueldo y prestaciones, y para el caso de que se nieguen a entregarlas, se demanda el pago del 5%

los Trabajadores, que los demandados debieron enterar a dicho Instituto (INFONAVIT) a razón del 5% sobre el

4.- La entrega de las constancias de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para

hechos de esta demanda.

éstos incurrido en el despido injustificado de que fui víctima, que se precisarán detalladamente en el capítulo de

permanezca separada del trabajo por causas imputables a los demandados, que hubiese recibido de no haber

3.- El pago de las prestaciones legales y contractuales que dejé de percibir durante el tiempo que

oportuno de conformidad con lo señalado en su caso por el propio artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.

los salarios vencidos que en su momento pudieran generarse y que se solicita sean cuantificados en el momento procesal

se retiene el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vigente, interés compuesto que implica una capitalización respecto de

que esta autoridad decidiera aplicar la legislación vigente solicitó desde este momento que el pago de los intereses a los que

base fundamental del Derecho del Trabajo, garantizada en el artículo 123 constitucional. Ahora bien para el indebido caso

cual atenta contra la dignidad del trabajador y los principios de seguridad y certeza jurídica y el principio de justicia social, lo

o expulsión indiscriminada de trabajadores de sus centros de trabajo, sin previa autorización de la autoridad de trabajo, lo

estado de indefensión completamente. Así, podrán los patrones reducir la plantilla de personal, lo que facilitará la separación

injustificado, misma que hoy desaparece en perjuicio del trabajador, quien que en total inseguridad jurídica, dejándolo en

o afectación de los derechos laborales que tenía con los demandados, ya que es factible que éstos pudieran llegar a utilizar las hojas en blanco que firme, en perjuicio de mis intereses, haciendo mención que las renunciadas en blanco que firme como requisito indispensable para laborar con los demandados, no tenían fecha, lo cual notara o distinguirá esta autoridad en el momento en que las exhiban los demandados, ya que lo más seguro es que la fecha no coincida con el tipo de letra, tinta, márgenes puntos de impresión que ya tenía plasmada el machote que nos hacen firmar a los trabajadores, lo que se hace de su conocimiento a esta H. Autoridad, hecho que fue presenciado por una persona, que en su momento ofreceré como testigo singular.

10.- EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, que labore durante todo el tiempo para los demandados, ya que la jornada de labores era de LUNES A SÁBADOS en un horario de las 08:00 a las 18:00 horas, teniendo como día de descanso semanal los DOMINGOS, contando dentro de dicho horario con 27 minutos para tomar alimentos de las 16:00 a las 16:27 horas, pero siempre encontrándose a disposición de la parte demandada, por lo que este tiempo se deberá tomar como efectivamente laborado, por lo que laboraba tiempo extraordinario diario de dos horas. Dicha prestación deberá de ser por todo el tiempo que duró la relación laboral, y hasta un día antes del injustificado despido del que fui objeto. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. Haciendo notar a esta H. Junta, que las actividades que desarrollé al servicio de la moral demandada, no implicaban un desgaste físico ni mental constante, además de que, por recomendación de los demandados, tomaba breves descansos cada cuarenta y cinco minutos, y dichos periodos de descanso no eran mayores a diez minutos, con el propósito de que no tuviera una jornada laboral extenuante y pudiera ejecutar mi trabajo de manera óptima y eficiente, lo anterior sin contar que el tiempo de realización de dicha jornada fue por un tiempo razonablemente corto y que hace verosímil mi desempeño en tales condiciones.

11.- La declaración que haga esta H. Junta de que el tiempo que dure el presente conflicto se tenga como tiempo efectivamente laborado para efecto de la jubilación y/o pensión pudiera corresponderme, dado el despido injustificado del que fui objeto fue ajeno a mi voluntad.

12.- La devolución de todos y cada uno de los descuentos indebidos que le fueron hechos por concepto de IMPUESTOS ya que en ningún momento se especificó a qué impuesto y por qué porcentaje se estaba realizando el descuento que por este concepto se le deducía de manera ilegal.

13.- De manera alternativa a las acciones ejercidas en los numerales/incisos precedentes, solo para el caso de que ésta H. Junta considerara que no obstante ser injustificada la separación efectuada por los demandados, existiera algún motivo o causa legal por la cual no pueda ser reinstalada o en su caso los demandados se negasen a reinstalar, haciendo uso de las facultades que le concede el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, demandando en forma subsidiaria las siguientes prestaciones:

13.1.- El aguinaldo correspondiente a todo el tiempo en que estuvo vigente la relación de trabajo, así como el correspondiente al último periodo de prestación de servicios, hasta antes de ser injustificadamente despedida.

13.2.- El pago de vacaciones correspondiente a todo el tiempo en que estuvo vigente la relación laboral y el pago que corresponden a la prima vacacional, así como los correspondientes al último periodo de prestación de servicios, hasta antes de ser injustificadamente despedida.

13.3.- Tres meses de salario integrado por concepto de indemnización Constitucional, por haber sido injustificadamente despedida, en los términos de la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 50, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, aplicables y vigentes al ingreso con los demandados.

13.4.- Los salarios vencidos y los que se sigan venciendo, a razón de salario integrado, computados desde la fecha en que fui injustificadamente despedida y hasta aquella en que se de total cumplimiento al laudo condenatorio que se dicte, en los términos de lo dispuesto por la fracción XXII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, aplicables y vigentes al ingreso con los demandados. Ahora bien, para el caso que esta autoridad decidiera aplicar la legislación vigente solicito desde este momento que el pago de los intereses a los que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vigente.

13.5.- El pago de Veinte días de salario integrado por cada año de servicio prestado, así como otra parte proporcional de los mismos por lo que hace al último año, a razón de salario integrado, en los